

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintidós de enero de dos mil veintiuno

**MEDIDA CAUTELAR
EXPEDIENTE: 2020 00300 00**

**EDWIN JAVIER PACHECO HERNÁNDEZ VS NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por el señor **EDWIN JAVIER PACHECO HERNÁNDEZ** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por el apoderado de la parte actora.

I. MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS:

Con la presentación de la demanda el apoderado de la parte actora el Dr. Wilmer Jackson Peña Sánchez, presentó solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados y su respectivo restablecimiento anticipado del derecho, en los siguientes términos:

“1. De forma respetuosa solicito al despacho proferir medida cautelar de suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician”

“2. De igual forma, solicito se profiera medida cautelar de carácter patrimonial, a favor de EDWIN JAVIER PACHECO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de Ciudadanía 1.067.879.923 de Montería en la cual se ordene el de pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados.”

II. TRÁMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:

De la Medida cautelar se corrió traslado a la entidad accionada mediante auto del 30 de octubre de 2020 por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S. para lo cual se realizó la notificación personal al correo de la entidad accionada y se le corrió traslado del 19 al 26 de noviembre de 2020.

DEL TRASLADO DE LAS MEDIDAS: Mediante oficio radicado de manera electrónica el 23 de noviembre del 2020, el apoderado de la entidad accionada dio contestación al traslado de la medida cautelar en la que se opuso a la prosperidad de la misma. Sostuvo que la solicitud carece de todo fundamento legal y jurisprudencial, además de no contener soporte probatorio alguno. En este sentido y siendo que la

solicitud no cumple con los requisitos del artículo 594 del C.G.P y los artículos 229 y 231 del C.P.A.C.A, no hay forma de acceder a la medida cautelar solicitada.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A, la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contraríe de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, **es la sustentación expresa de la petición**, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

“...Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como

¹ C.E. , Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)"²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos administrativos demandados y el restablecimiento patrimonial solicitado:

En primer lugar, el apoderado de la parte actora, de manera indeterminada y sin sustento, señala que debe declararse la “*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*” y se debe ordenar “*(...) el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*” solicitud que no solo carece de determinación de los actos enjuiciados, sino también, de sustentación.

No obstante, encuentra el Despacho que las pretensiones del demandante buscan que se aplique la excepción de inconstitucionalidad y en consecuencia se inaplique los actos administrativos demandados que negaron (i) el incremento del salario básico en un porcentaje del 60%, (ii) el reconocimiento de la prima de actividad y (iii) el ajuste del Subsidio familiar, pretensiones que deben ser analizadas a la luz de las condiciones particulares y concretas del Soldado Profesional para determinar su viabilidad jurídica, para lo que es indispensable el expediente administrativo del actor.

Ahora bien, en el presente caso el análisis de los actos administrativos demandados no desprende a simple vista y de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta una violación a normas superiores que ameriten el decreto de una medida previa; en efecto, al realizar el cotejo de las normas que se confrontan, las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar no se puede extraer bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deba decretarse medidas cautelares solicitadas.

Lo anterior, porque esta decisión requiere un estudio de fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación en aras de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia. Se debe agregar, que el actor no demostró que la medida cautelar fuera urgente para conjurar o evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que ameritara suspender los efectos de los actos administrativos y desconocer la presunción de legalidad que los envuelve.

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados y su respectivo restablecimiento económico, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 806 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

FCS